



MINISTERIO
DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
GABINETE DEL
SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD

12 JUL 2023

REG. SALIDA N° 475

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

GABINETE

Vista la solicitud de acceso a la información pública con nº de expediente 001-079943 realizada por

, con número de identificación ,
formulada al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG), se informa lo siguiente:

La información correspondiente al Bloque I no es competencia de esta Secretaría de Estado de Seguridad.

En relación al Bloque II, la legislación nacional señala que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán actuar conforme a los principios de congruencia, oportunidad, y proporcionalidad que tienen su lógica transposición en unidades que se dedican al control de masas y orden público por medio de un empleo de medios, técnicas, tácticas y procedimientos (TTP) de intervenciones policiales para resolver incidentes de orden público.

En relación al rol de la prensa cabe destacar el "Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España para la identificación de los Profesionales de los Hechos que requieran Actuaciones Policiales", de 17 de marzo de 2011.

En el contexto de las manifestaciones, hay un conjunto de resoluciones y circulares, así como normativa con rango de ley orgánica que regulan el ejercicio del derecho de reunión y manifestación donde se destacan entre otras la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión y manifestación, Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana entre otras.

Por otra parte, los protocolos de actuación, son procedimientos de trabajo en los que se combinan los medios humanos y materiales con los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan para llevar a cabo la misión encomendada de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como garantizar la seguridad ciudadana, formando dichos procedimientos parte de la esfera de información sensible para el buen desempeño de estos objetivos. El éxito o no del trabajo policial depende en gran medida de la protección de estos procedimientos, tal como se reconoce en Acuerdos del Consejo de Ministros y por el Tribunal Supremo, tratando a estos procedimientos como información necesitada de protección y de un especial deber de reserva.



Por tanto, se deniega el acceso a los protocolos solicitados, conforme al artículo 14.1 d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, "el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad pública".

En esta línea se pronunció el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su resolución R/0010/2015, de fecha 6 de mayo de 2015, al desestimar una petición en la que se solicitaba "el protocolo de actuación de las Unidades de Intervención de la Policía", manifestando en los fundamentos jurídicos de la misma que "el acceso a los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puede poner en peligro la efectividad del ejercicio de sus funciones, con lo que la denegación de la información se considera suficientemente justificada".

En el caso de cualquier actuación llevada a cabo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se considere contraria a derecho, se estará a lo dispuesto en las leyes penales con las limitaciones, garantías, derechos y obligaciones que las mismas conlleven.

La formación teórica en normativa, así como las técnicas, tácticas y procedimientos se hace por medio de cursos de especialización en la Unidad Especial de Intervención (UIP) de la Policía Nacional, curso cuya superación es imprescindible para prestar servicio en estas unidades.

Asimismo, todo el personal que forma parte de las Unidades de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, tiene la certificación de aptitud obligatoria en Control de Masas, que habilita para prestar servicio en los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS).

Igualmente, se significa que el personal que forma parte de este tipo de Unidades, debe estar en posesión de las correspondientes aptitudes, tanto física y psíquica como técnica, impartándose en el curso de especialidad todas las materias relacionadas con las actuaciones relativas al control de masas, tanto de carácter administrativo como operativo.

Además, en base a la eficacia y calidad del servicio prestado, se requiere un alto nivel de preparación física, técnica y moral, lo que obliga al continuo estudio de materias técnicas, así como la realización periódica de prácticas y entrenamientos.

En resumen, la actuación de las unidades de control de masas está guiada, entre otros, por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, siendo el uso de la fuerza el último recurso a utilizar, para lo cual los agentes son formados en un amplio abanico de medidas disuasorias y de desescalada.



En relación al bloque III, la UIP a través de su Jefatura de Unidades, realiza análisis de manera periódica de todas las intervenciones efectuadas.

Los mandos de las distintas Unidades de Intervención Policial, o de la Jefatura de UIP (si afectara a varias) realizan un análisis de riesgos para la correcta ejecución del dispositivo policial, no siendo potestad de la Policía Nacional el prohibir una manifestación.

La Policía Nacional realiza las identificaciones cumpliendo rigurosamente lo previsto en el artículo 5, apartado 1-b, Principios Básicos de Actuación, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: “b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión”, y el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conforme al cual se establecen los supuestos que habilitan dicha identificación y los principios que deben regir la práctica de la misma.

También, las actuaciones que desarrolla la Guardia Civil en materia de control de masas, se realizan conforme establece la Constitución Española, resto de normativa aplicable al respecto y siempre atendiendo a los principios básicos de actuación establecidos en la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En todo caso, tal y como se señaló anteriormente, en el caso de cualquier actuación llevada a cabo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se considere contraria a derecho, se estará a lo dispuesto en las leyes penales con las limitaciones, garantías, derechos y obligaciones que las mismas conlleven.

Finalmente, y a este respecto, cabe señalar que, en las distintas unidades de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, existen Libros de Quejas y Sugerencias en los que los ciudadanos pueden expresar las quejas, sugerencias o felicitaciones a, las cuales, junto a la correspondiente información reservada, se hacen llegar a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, a los efectos oportunos.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse con carácter potestativo, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de UN MES, desde el día siguiente al de la fecha de notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 19/2013, en concordancia con lo establecido en el artículo 112.2 de la



Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez resuelta dicha reclamación, o de no hacer uso de la misma, podrá interponer, ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de DOS MESES, desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa de la reclamación o en que éste deba entenderse presuntamente desestimada, y en el caso de no hacer uso de la misma, desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 20.5 de la Ley 19/2013, y 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 10 de julio de 2023.

LA DIRECTORA DEL GABINETE

Ana María Prejigueiro Rodríguez